

El infrascrito Comisionado Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, hace constar que: en el acta número cuatro de fecha veintiuno de enero de dos mil diecinueve, se acordó en el punto cuatro de dicha acta lo que se transcribe a continuación: “”**PUNTO CUATRO:** En seguimiento a la contratación de plazas vacantes, específicamente al punto abordado en el acta número 2 de fecha 14 de enero de 2019, donde el Pleno aprobó por unanimidad declarar vacantes las ocho nuevas plazas aprobadas en la Ley de Salarios para el año 2019 y autorizó el inicio de los procesos de selección de las plazas de Técnico Jurídico de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información Pública y Técnico de la Unidad de Protección de Datos Personales e instruyó a la Unidad de Recursos Humanos para que en coordinación con la Jefatura Jurídica realicen las acciones necesarias y de conformidad a la normativa aplicable para llenar las dos plazas vacantes mencionadas. Al respecto la Jefa de Recursos Humanos informó que notificó al Lic. Carlos Calderón, Jefe Interino de la Unidad Jurídica, sobre las instrucciones giradas y el inicio de los procesos de selección de personal. Tomando en cuenta lo antes mencionado, el Lic. Carlos Calderón, solicitó información a la Unidad de Recursos Humanos en relación al tiempo laborado, edad, resultados de evaluaciones de desempeño, conocimientos y formación académica del personal activo de la Unidad Jurídica. Con la información proporcionada por la Unidad de Recursos Humanos se realizó un análisis prolijo de los requisitos exigidos en el perfil de la plaza con el personal que integra actualmente la Unidad Jurídica a la luz de los condicionantes que establece la Ley del Servicio Civil. Basado en ese análisis realizó las siguientes propuestas al Pleno: 1) En el caso de la Técnico de la Unidad de Protección de Datos Personales, quien cumple los requisitos profesionales, experiencia de un año en el tema y la realización de cursos sobre especialización en protección de datos personales es la Licenciada Claudia Margarita Torres, con el cargo nominal de Secretaria II, quien ha fungido funcionalmente en esta plaza desde el 2018; no obstante, no tiene aún dos años de haber ingresado al Instituto, por lo que no cumple con el condicionante que establece la Ley del Servicio Civil en su Art. treinta y cuatro: “Sólo podrán ser promovidos o ascendidos a una plaza vacante los funcionarios o empleados que hubieren desempeñado un cargo comprendido en la clase inmediata inferior durante el término de dos años por lo menos”; sin embargo, la misma disposición señala que “si en la clase inmediata inferior no hubiere más que un candidato y fuere apto para desempeñar el cargo, el ascenso se hará sin ningún requisito”; por tanto, al ser la única persona que ha coadyuvado junto con el Jefe de la Unidad de Protección de Datos Personales en el trámite de más de trescientas

apelaciones y procedimientos sancionatorios, es recomendable promover a la Licenciada Claudia Margarita Torres, basados en el principio pro operario, y el de justicia social contemplado en el Art. cincuenta y dos de la Constitución de la República. El comisionado Hernán Gómez expresó que con base a dicho análisis y fundamento jurídico es viable nombrar a la Licenciada Torres en dicha plaza. Por su parte, la Licenciada Herminia Funes manifestó que el condicionante de los dos años se suple dado que ella es la única persona que realiza las labores técnicas de la Unidad de Protección de Datos Personales, y que se ha visto su diligencia y esmero en la tramitación de los casos. En ese sentido, el Pleno por unanimidad acordó aceptar la propuesta de nombrar a la Licenciada Claudia Margarita Torres como Técnico Jurídico de la Unidad de Protección de Datos Personales. Por otro lado, sobre la plaza de Técnico Jurídico de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información, el Licenciado Calderón expresó que la Licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz, actual Oficial Receptora de Denuncias, ha presentado interés en trasladarse a una plaza donde pueda realizar proyectos de resolución de todo tipo. En ese sentido, al analizar su perfil con el de la plaza ofertada, se observa que ella cumple con todos los requisitos solicitados. Asimismo, tienen más de cinco años en el tema y ha estado asistiendo como apoderada del Instituto en los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que, en virtud del Art. treinta y siete de la Ley del Servicio Civil, se recomienda trasladar a la mencionada empleada a dicha plaza, y se deje a concurso interno la plaza de Oficial de Recepción de Denuncias. El Pleno por unanimidad acordó aceptar dicha propuesta de trasladar a la Licenciada Kelly Zamaira Rodríguez Ortiz como Técnico Jurídico de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información, y promover en concurso interno la plaza de Oficial de Recepción de Denuncias. Por otro lado, el Licenciado Calderón expuso que la Unidad Jurídica y todas las Unidades que la conforman, se encuentran tramitando una gran cantidad de recursos de apelación, cuya dificultad es mayor que los casos que se conocían en el pasado, aunado a ello, la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos que trae consigo un impacto al procedimiento del trámite de las apelaciones, sancionatorios, y serias consecuencias si estos no se tramitan en los plazos que establece la ley. En ese sentido, debido al poco personal con el que se cuenta para tramitar un promedio de seiscientos casos al año, solicitó al Pleno que la Plaza del Técnico de Cooperación y Proyectos, recientemente aprobada, se nombre funcionalmente como Técnico Jurídico de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información, con labores esenciales de su función originaria, por lo que, de aceptar la propuesta, se recomienda promover a la Licenciada Gabriela Alejandra Castillo, Secretaria I de la Unidad de Derecho de Acceso a la Información, ya que